LA FALTA DE CERTEZA, ESPECIFICIDAD Y SUFICIENCIA SOBRE EL CARGO POR DESCONOCIMIENTO DE LA RESERVA DE LEY ESTATUTARIA, NO LE PERMITIÓ A LA CORTE PROFERIR UN FALLO DE FONDO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA QUE TIPIFICA EL DELITO DE VIOLACIÓN DE LOS TOPES Y LÍMITES DE GASTOS ELECTORALES

VII. EXPEDIENTE D-13216 - SENTENCIA C-539/19 (noviembre 13)
M.P. José Fernando Reyes Cuartas

1. Norma acusada

LEY 1864 DE 2017
(agosto 17)

Mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática

ARTÍCULO 15. Adiciónese el artículo 396B al Título XIV (Delitos contra mecanismos de participación democrática) de la Ley 599 de 2000, así: Artículo 396B. **Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.** El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

2. Decisión

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del artículo 15 de la Ley 1864 de 2017, por medio de la cual se adicionó el artículo 396B al título XIV (delitos contra mecanismos de participación democrática) de la Ley 599 de 2000 –Código Penal-.

3. Síntesis de la providencia

La presente demanda estuvo dirigida contra el artículo 15 de la Ley 1864 de 2017, el cual según el actor, desconoce el principio de reserva de ley estatutaria en virtud de lo dispuesto en los artículos 109 y 152 literales c) y d) de la Constitución. Además, el accionante consideró que la disposición acusada había modificado lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley estatutaria 1475 de 2012, por lo cual también consideró infringido el artículo 153 superior, al haber desconocido el procedimiento especial que debe surtirse para tal efecto.

Sobre el particular, la Corte se inhibió para pronunciarse sobre el fondo del asunto, al encontrar que no fue formulado siquiera un cargo apto de constitucionalidad, por no contener los argumentos ciertos, específicos y suficientes que habilitaran el juicio de inconstitucionalidad, ya que la demanda al afirmar que la preceptiva examinada modificó el régimen sancionatorio fijado en la ley estatutaria para la superación de topes de gastos de campaña, se estructuró a partir de una lectura subjetiva de la norma que no se acompaña con el tenor literal de la misma, ni que se puede inferir a partir de los métodos tradicionales de interpretación jurídica.

Adicionalmente, el actor no demostró por qué la disposición examinada estaba cubierta por la reserva de ley estatutaria y se soportó principalmente en citas jurisprudenciales sin realizar ninguna construcción argumentativa a partir de esos pronunciamientos. En efecto, no se explicó por qué la tipificación de un delito relativo al desconocimiento de los topes de gastos de campaña correspondía en estricto sentido al desarrollo de una función electoral o a la regulación de instituciones y mecanismos de participación ciudadana, que hicieran imperativa su adopción mediante ley estatutaria. Al respecto, la Corte reiteró que la jurisprudencia consolidada de este Tribunal ha sostenido que las leyes penales se pueden aprobar mediante el procedimiento ordinario, en tanto no regulan a cabalidad el disfrute de la libertad de las personas comoquiera que solo la afectan en determinados casos.

De tal forma, no se suscitó una duda mínima de constitucionalidad necesaria para habilitar el juicio de control abstracto por parte de este Tribunal. En esa medida, no fueron aportados los argumentos y elementos de juicio persuasivos para generar una duda mínima que permita desvirtuar la presunción de constitucionalidad respecto de las normas acusadas.

4. Aclaración de voto

No obstante haber acogido el sentido de la decisión, el Magistrado **Alberto Rojas Ríos** aclaró su voto dado que, en su criterio, los requisitos exigidos al actor resultan exorbitantes, máxime si en aplicación del principio *pro actione* la Corte puede interpretar la demanda a partir de los razonamientos expuestos por el demandante con el propósito de fortalecer la formulación de los cargos.

Para el Magistrado Rojas Ríos, la argumentación del actor es clara pues deja en evidencia su propósito de impugnar la constitucionalidad de la norma en tanto esta establece limitaciones para la financiación de campañas electorales que no pueden adoptarse por medio de una Ley ordinaria, dado que su contenido debe ser reglado por Ley estatutaria (principio de legalidad).

Si bien la argumentación no podía agotarse en la exposición de jurisprudencia por parte del actor, el Magistrado Rojas Ríos considera que de tales argumentos se desprende su propósito de establecer una oposición verificable entre la norma demandada y la Carta Política, razón por la cual la Corte pudo haber suplido los vacíos argumentativos para configurar el requisito de especificidad y asumir el examen de constitucionalidad propuesto.